

Santiago, a catorce de noviembre de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

En los autos seguidos ante esta Corte bajo el rol N° 22.271-2021, se trajeron los autos en relación para conocer de la reclamación presentada por las solicitantes, Constructora LN Spa y Constructora Cristi Limitada, en contra de la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en lo sucesivo TDLC) que no admitió a tramitación la petición por ellas formulada de dar inicio al procedimiento previsto en el artículo 18 N° 3 del Decreto Ley N° 211, a fin de que ese tribunal dictase instrucciones de carácter general para el mercado de obras de infraestructura pública licitadas por municipios.

En la especie Constructora Luis Navarro SpA y Constructora Cristi Limitada han solicitado que se dicte, en procedimiento no contencioso, el citado instructivo basadas en que en este mercado se cometen constantes infracciones a la libre competencia, lo que se aprecia, por ejemplo, en el número de participantes que presentan ofertas válidas en esta clase de licitaciones, que, en los años 2018 y 2019, fue de 2,7 oferentes en promedio, por lo que resulta necesario impartir instrucciones básicas que aumenten la presión competitiva.

Aducen que el de obras públicas municipales es un mercado inserto en un sistema poco transparente, carente



de fiscalización de calidad y en tal sentido aseveran que el problema deriva de la forma en que se evalúan las propuestas, de forma tal que sólo se otorga al precio un promedio del 34,2% del puntaje final, mientras que otros factores que se evalúan habitualmente son la experiencia, con un 25,7%, y la capacidad económica, con 15,5%. Explican que, en efecto, la forma en que se practican estas ponderaciones permite restricciones a la competencia que estiman ilegales, pues, aun cuando todos los competidores son, en principio, similares en capacidad técnica y financiera, dicho proceder favorece a algunos, de modo que, en la realidad, no existe verdadera competencia.

Enseguida subrayan que en el año 2006 el TDLC dictó Instrucciones de Carácter General en relación al mercado de servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos (que, entre otras cosas, obligaban a las Municipalidades a "fijar un estándar mínimo de calidad exigible a todas las propuestas y establecer como criterio principal de adjudicación el precio ofrecido", a "justificar fundadamente" el uso de parámetros distintos al precio para asignar la licitación y que prohibían "imponer a los interesados en participar en una licitación exigencias que otorguen ventajas artificiales que reduzcan injustificadamente el número de potenciales participantes"), las que, a su juicio, debieran ser



aplicadas, al menos en parte, al mercado de autos, pues la competencia en precios tiende a entregar resultados más eficientes en costos.

Añaden que en el mercado de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se exige que toda empresa que participe de sus licitaciones cumpla con ciertos requisitos establecidos ex ante (como experiencia o capacidad económica), exigencias que, según manifiestan, operan como requisitos de admisibilidad. Enseguida explican que su pretensión es que la forma de evaluar en el mercado de autos se asemeje a la que se emplea por el MOP o por el MINVU o, en su defecto, que se eleve la ponderación del precio y que la avaluación de la experiencia, patrimonio u otros aspectos se vincule al monto y especialidad del contrato, de modo que se amplíe el universo de oferentes y se ejerza presión competitiva. A lo dicho añaden que características como la experiencia o el patrimonio son evaluadas de forma lineal conjuntamente con el precio y sin que guarden relación con las obras licitadas, de modo que un oferente con menor puntaje en esos ítemes habrá de suplir tal desventaja sacrificando precio, el que, dada su baja ponderación, deberá ser reducido en forma importante, todo lo cual limita la competencia o permite ofertas temerarias.



En cuanto al mercado relevante sostienen que corresponde al de la construcción de obras públicas, incluyendo la remodelación, conservación o normalización (cuando la magnitud de la construcción es superior a los servicios llamados de remodelación, conservación o normalización), que se licitan por municipios del país, siendo el agente económico el que define el mercado, principalmente.

Luego señalan que su parte recopiló información sobre licitaciones de infraestructura pública, mayores a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, convocadas por las Municipalidades del país en los años 2018 y 2019, estudio a partir del cual concluyen que existe una relación perversa entre el precio y otras variables estáticas consideradas para evaluar a sus participantes, misma que opera, según aseveran, como una barrera de entrada, además de una posible fuente de corrupción. Destacan, asimismo, que las licitaciones que ponderan el precio en mayor medida tienden a adjudicar a ofertas más baratas.

A continuación sostienen que existen tres motivos que justifican la necesidad de una instrucción en este mercado. En primer lugar, la defensa de la libre competencia, considerando que los sistemas de evaluación descritos establecen barreras artificiales que entregan una apariencia de legitimidad y competencia donde no la hay; en segundo término la eficiencia en el uso de los



recursos del Estado y, por último, la finalidad de evitar la corrupción. Desde esta perspectiva acusan que, si al año 2014 existían 42.715 empresas constructoras, ¿por qué, habiendo tanto potencial competidor, tan pocos participan simultáneamente en las licitaciones de este mercado?

En cuanto a los beneficios esperados de las instrucciones pedidas, sostienen que aspiran a una competencia más sana, justa, transparente y equitativa, enfatizando al efecto que una evaluación en dos etapas, es decir, con una precalificación y después con una competencia principalmente en precio, es lo óptimo para el mercado, pues permitirá que participen más empresas y que las más eficientes se adjudiquen los contratos. Agregan que, en caso de perseverar con un sistema de una única etapa, es menester que el precio pondere al menos un 80%.

Por último, abordan el carácter de barrera de entrada de estos hechos, afirman que la Administración Pública, en la que se incluye a los municipios, debe cumplir con la normativa de la libre competencia y resaltan que las solicitantes tienen un interés legítimo, evidente y de contenido económico, en la dictación de estas instrucciones, para lo cual exponen dos casos que afectaron directamente a las solicitantes, relacionados



con sendas licitaciones convocadas por la Municipalidad de San Pablo y por la Municipalidad de Coyhaique.

Terminan solicitando que se acepte a tramitación esta consulta, se pidan los informes que resulten pertinentes y, en definitiva, se dicten instrucciones de carácter general para las licitaciones de obra pública realizadas por los municipios, que consideren como parámetro básico el precio (junto con otros factores móviles, de ser necesarios), previa calificación de la idoneidad del oferente, tanto en materia patrimonial como experiencia o cualquier otro factor estático. En subsidio, que la ponderación mínima del precio sea de un 80%; que la ponderación del patrimonio necesario no sea superior al 50% del valor de la obra y que la experiencia no sea superior a 10 veces la magnitud de lo que se construye y, además, que las diferencias de puntuación en la evaluación de experiencia y patrimonio sean lineales y no por tramos, o el sistema que el tribunal determine.

Por resolución de 24 de diciembre de 2020 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia decidió no admitir a tramitación, conforme al artículo 18 N° 3 del Decreto Ley N° 211, el asunto propuesto.

Para arribar a dicha determinación los juzgadores revisaron la procedencia de la solicitud conforme a lo establecido en los números 2 y 3 del artículo 18 del Decreto Ley N° 211, considerando que las comparecientes



aludieron en su escrito a las atribuciones previstas en ambos preceptos.

Así, y en lo que atañe al artículo 18 N° 2, declaran que, si bien el hecho, acto o contrato consultado que existe o está por celebrarse, debe ser específico, estar suficientemente determinado y estar pronto a su materialización, ejecución o celebración, la petición de autos no cumple tales requisitos, pues no recae en una licitación o en unas bases de licitación específicas, sino que en todas las bases que, a futuro, los municipios preparen, motivo por el cual concluyen que no es posible dar inicio al procedimiento consultivo establecido en esa norma.

Luego, destacan que el artículo 18 N° 3 se refiere a la facultad de dictar instrucciones de carácter general, las que, según se desprende del texto de dicha norma, "deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella", razón por la cual, para decidir si cabe dar inicio al procedimiento allí contemplado, se debe determinar el sentido y alcance de la expresión "particulares" que ahí se emplea, en especial si tal vocablo incluye a organismos de la administración del Estado, como las municipalidades.



En ese sentido indican que, si bien el DL N° 211 no define el sentido de "particulares", existen antecedentes que permiten concluir que los organismos de la administración del Estado no se encuentran comprendidos dentro de dicha disposición. Así, al consagrar las conductas ilícitas que se sancionan en sede infraccional, el artículo 3 del DL N° 211 se refiere al sujeto que comete la infracción como "el que", sin hacer ninguna distinción, mientras que, cuando se trata de la potestad consultiva, el DL N° 211 establece que quienes pueden consultar son las partes de un acto, hecho o contrato, o bien, quien tenga interés legítimo, sin calificar su naturaleza privada o pública, lo que contrasta con los destinatarios de las instrucciones de carácter general, en que el legislador optó por una expresión más restrictiva, aludiendo únicamente a los "particulares".

Estiman que, en consecuencia, una interpretación armónica de las normas del DL N° 211 demuestra que las instrucciones de carácter general se dirigen a particulares, con exclusión de los organismos de la administración del Estado.

Por último, y a mayor abundamiento, señalan que la historia de la Ley N° 19.911, que incorporó la facultad de dictar instrucciones de carácter general, contiene referencias a "particulares", en contraposición a los organismos de la administración del Estado.





Conforme a lo razonado concluyen, entonces, que el legislador distinguió a los "particulares" de otras entidades como son los organismos de la administración del Estado, entre los que se encuentran las municipalidades, motivo por el cual concluyen que ese tribunal no es competente para dictar instrucciones de carácter general que las obliguen, pues éstas únicamente podrían vincular a personas naturales o jurídicas de derecho privado, por ser estos los "particulares" aludidos, y a empresas del Estado, en tanto sus actividades están sujetas a la legislación común aplicable a los mismos.

Luego subrayan que estas conclusiones no obstan a que las municipalidades deban atenerse siempre a la normativa de libre competencia, de acuerdo con el mandato general del artículo 2 de la Ley N° 18.575 y al DL N° 211, que tiene aplicación general tanto a personas de derecho público como de derecho privado que intervengan o puedan afectar los mercados.

Finalmente, precisan que la Instrucción de Carácter General N° 1, a que alude la solicitante, fue modificada por la Instrucción de Carácter General N° 3/2013, que eliminó las obligaciones que se imponían a los municipios, en razón de los motivos mencionados.

En contra de dicha determinación la defensa de las peticionarias dedujo recurso de reclamación fundada, en



primer lugar, en que las conclusiones referidas a la falta de legitimidad y a la falta de "especificidad" de actos o contratos existentes o por celebrarse, en relación a lo prescrito en el artículo 18 N° 2 del DL N° 211, no son efectivas. Así, aduce que la legitimidad activa de su parte se funda en actos y contratos específicos en los que las solicitantes han sido afectadas por la problemática expuesta, mientras que la legitimidad pasiva viene dada por el órgano que supuestamente comete la infracción. Asevera que la especificidad expuesta es suficiente, acotada y definida, en cuanto consta en un contrato de adhesión, que, además, reúne todas las exigencias para ser regulado por el DL 211, pues interviene un agente económico determinado, esto es, una municipalidad, sea una o todas; recae en un negocio determinado, esto es, la construcción de un bien inmueble, que es objeto de una licitación pública y en el que hay involucrados fondos públicos.

Subraya que, si bien la materialidad de los diversos contratos es, evidentemente, distinta, se trata en definitiva de un sólo tipo de convención, de modo que, aun tratándose de diversos proyectos, al final todos ellos, en las materias que se quieren regular, son lo mismo, pues tienen la misma especificidad, como ocurría con los contratos relativos a la basura. Alega que, en último término, se trata de actos repetidos y permanentes



que dicen relación con un tipo específico de contrato y que emanan de las municipalidades, esto es, de una misma persona jurídica, a la vez que pone de relieve que instrucciones como las que su parte ha solicitado dictar se aplican a actos o contratos futuros.

En un segundo acápite critica la conclusión del tribunal, conforme a la cual tanto el licitante (Municipalidad) como el comprador (oferente) sólo pueden ser particulares. Al respecto manifiesta, por un lado, que los organismos públicos, incluyendo a las Municipalidades, pueden ser agentes económicos, tal como lo reconoce el fundamento 12° de la resolución reclamada, pese a lo cual no sería posible dictar a su respecto una simple orden, no obstante que podrían ser sancionados en virtud de la legislación que rige esta materia. Luego, y en cuanto resulta atingente a la Instrucción N° 3, que deja sin efecto la N° 1, aplicable a los contratos licitados por municipios en materia de residuos domiciliarios, señala que al modificar este último instructivo el TDLC no hace alusión alguna a la distinción entre municipios y particulares, sino que se funda en la existencia de cuerpos normativos nuevos que rigen este ámbito.

Alega, además, que las instrucciones vinculadas con las tarifas del mercado de telefonía se aplican, por consiguiente, a proveedores de servicios públicos. En ese



contexto destaca que el TDLC incurre en una contradicción, pues, mientras acoge a tramitación la petición de instrucciones para un mercado constituido por un servicio público regulado y tarifado por el Estado, resuelve en sentido contrario respecto de una petición similar para el mercado de obras públicas licitadas por los municipios, debido a que en la primera no existiría un agente público y en el segundo sí, conclusión que estima errada y arbitraria, máxime si la jurisprudencia ha establecido que el DL N° 211 es plenamente exigible a todos los organismos del Estado que intervienen en materia económica. Aduce, asimismo, que con su negativa el tribunal deniega la justicia requerida, dejando a su parte en la indefensión.

En un tercer capítulo aborda la competencia del TDLC y al respecto destaca su rol como regulador de la libre competencia, en tanto se trata de un tribunal que asume funciones reguladoras de carácter general y que crea e implementa políticas públicas. Aduce que, en consecuencia, la limitación impuesta por el tribunal al uso de sus facultades de dictar Instrucciones de Carácter General implica limitar seriamente el alcance de la regulación de carácter general del mercado, dado que la ley no puede prever todas las situaciones de afectación a la libre competencia, por lo cual existe un amplio



espacio para la elaboración de políticas públicas por esta vía.

Añade, además, que el N° 3 del artículo 18 no prescribe que sólo rige a particulares y que, de hecho, tal precepto puede ser aplicado a determinados agentes económicos estatales, como ocurre a propósito de los servicios concesionados y supervigilados y de los órganos públicos que los regulan. Expone, asimismo, que la circunstancia de que ciertas disposiciones deban ser consideradas por los particulares no impide que hayan de ser cumplidas por agentes públicos, en especial si en este ámbito se trata de contratos de adhesión. Al respecto estima paradójico que para una Corporación Municipal se pueda dictar una instrucción, mientras que para el municipio, no.

En un cuarto acápite resalta que el Estudio de Mercado sobre Compras Públicas, de noviembre de 2020, emanado de la Fiscalía Nacional Económica, contiene graves conclusiones, a la vez que destaca que la Ley N° 19.886 hoy se encuentra obsoleta en muchos aspectos, que las faltas de probidad en esta materia más que explicarse se deben calcular y que el mercado relevante que se pretende regular es poco competitivo y se encuentra en tierra de nadie, dado que no existe control preventivo de la Contraloría.



Termina solicitando que se revoque la resolución reclamada y se ordene tramitar la causa y dar inicio al procedimiento respectivo, sin perjuicio de lo que en definitiva falle.

Se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Para iniciar el análisis del arbitrio impugnatorio resulta pertinente destacar que, en la especie, las empresas Constructora Luis Navarro Spa y Constructora Cristi Limitada han deducido, en sede no contenciosa, solicitud al tenor de lo prescrito en el N° 3 del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, que contiene el texto refundido del Decreto Ley N° 211.

El mentado artículo 18 N° 3 previene que: *"El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:*

*[...]*

*3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella".*

**SEGUNDO:** La indicada solicitud, como se dijo, tiene por objeto obtener la dictación de instrucciones de carácter general para las licitaciones de obras públicas



realizadas por Municipalidades, en las que se consideren como parámetros básicos la competencia basada, principalmente, en precio, previa calificación de la idoneidad del oferente; en subsidio, que el precio ofrecido sea ponderado en un porcentaje mayor que la experiencia y la capacidad económica requeridas, sin perjuicio de que las diferencias de puntuación en la evaluación de estos dos últimos elementos sean lineales y no por tramos. Finalmente, y también en subsidio, piden que se aplique el método que el tribunal determine.

Deducida dicha acción el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia decidió no admitirla a tramitación por estimar, en síntesis, que una interpretación armónica de las normas del Decreto Ley N° 211 da cuenta de que las instrucciones de carácter general se dirigen a particulares, con exclusión de los organismos de la administración del Estado, entre los que se encuentran las municipalidades, motivo por el cual los juzgadores concluyen que ese tribunal no es competente para dictar instrucciones de carácter general que obliguen a tales corporaciones, desde que ellas únicamente podrían obligar a personas naturales o jurídicas de derecho privado, así como a empresas del Estado, en tanto sus actividades estén sujetas a la legislación común aplicable a los mismos.



**TERCERO:** La decisión del asunto sometido al conocimiento de esta Corte exige esclarecer, en consecuencia, si, con ocasión del ejercicio de la facultad prevista en el N° 3 del citado artículo 18, se ha de otorgar una interpretación restrictiva a la expresión "particulares" que allí se contiene, tal como lo ha establecido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

**CUARTO:** Al respecto cabe destacar, en primer lugar, que la voz "particulares" utilizada por el legislador abarca un amplio espectro de sentidos y acepciones, hasta el punto de que el Diccionario de la Real Academia Española contiene nueve entradas diversas, que dan cuenta de otros tantos entendimientos de esta expresión. Por consiguiente, no es dable entender esta expresión, exclusivamente, como sinónimo de "privados", esto es, como contrapuesta a la noción de entes u organismos "públicos", dados los diversos empleos y significados que este vocablo admite, dependiendo del contexto en el que se inserte. Así, por ejemplo, para ilustrar esta ambigüedad es dable sostener que, al disponer el N° 3 del artículo 18 que las instrucciones de que se trata deben ser consideradas en los actos o contratos "particulares", es posible entender que con dicha expresión el legislador se ha querido referir tanto a los actos o contratos singulares que se celebren en el ámbito regido por tales





reglas, como a los individuos específicos o concretos que acuerden tales convenciones (con independencia de su eventual adscripción al ámbito privado o público del derecho).

**QUINTO:** Por otro lado, es posible argüir que la actividad jurisdiccional materia de autos dice relación, en último término, con el ejercicio de facultades preventivas que tienen por fin no sólo el debido resguardo de la libertad de competencia de un mercado dado, sino que, por su propia naturaleza, ha de tender (como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, verbi gracia en sentencias dictadas en autos roles N° 24.828-2018 y N° 125.433-2020, en cumplimiento del mandato constitucional del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental), hacia la promoción y reforzamiento de una participación en igualdad de condiciones de los distintos intervinientes en el mercado. En otras palabras, la protección del bien jurídico propio de esta rama del Derecho debe ser ejecutada, además, a la luz de las disposiciones constitucionales que proveen, necesariamente, las líneas de pensamiento maestras que deben guiar, en lo fundamental, el quehacer, en lo que interesa, de los tribunales de la República.

**SEXTO:** Esclarecido lo anterior, y razonando en torno al caso concreto en examen, es útil subrayar que la doctrina ha sostenido una postura semejante a la que se



viene insinuando. Así, por ejemplo, se ha expresado que: *"Son destinatarios de esta potestad reglamentaria externa, emanada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuyo objeto es alcanzar a terceros, todas aquellas autoridades públicas que emitan normas infrarreglamentarias conculcadoras de dicho bien jurídico tutelado [...] son destinatarios de la potestad reglamentaria externa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las autoridades públicas en cuanto emisoras de normas infrarreglamentarias y que no correspondan a actividad propiamente jurisdiccional"*, de lo que deduce que *"los actos administrativos particulares y la actividad administrativa material de las autoridades públicas quedan alcanzados por la potestad reglamentaria externa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia"* (Valdés Prieto, Domingo. "Libre competencia y monopolio". Editorial Jurídica de Chile, primera edición. Santiago, 2006. Página 673 y 674).

En este sentido el señalado autor agrega que las *"autoridades públicas dotadas de potestades públicas infrarreglamentarias y jurisdiccionales deberán siempre dar cumplimiento a la legislación antimonopólica, noción en la que se incluyen los reglamentos externos emitidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia"*, pues, a su juicio, *"el principio general ha de ser el de la obligatoriedad y prevalencia de la potestad*



*reglamentaria externa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por sobre todas las normas administrativas infrarreglamentarias y actividad material que sean emitidas o realizadas, según corresponda, por autoridades públicas"* (obra citada, págs. 674 y 675).

Sobre este particular añade que la "garantía constitucional de la igualdad en el trato que el Estado y sus organismos han de brindar a los particulares en materias económicas conduce a entender que no puede la igualdad de oportunidades en la libre competencia, que tutela el Decreto Ley 211, quedar entregada a la discrecionalidad de organismos administrativos dotados de potestades infrarreglamentarias o a la actividad material de éstos", para finalizar enfatizando, además, que también "son destinatarios de la potestad reglamentaria antimonopólica las personas públicas -no las autoridades públicas, a las cuales ya nos hemos referido- y las personas privadas que desarrollan actividades económicas susceptibles de constituir atentados a la libre competencia" (Obra citada, págs. 675 y 676).

**SÉPTIMO:** En las anotadas condiciones aparece con nitidez que el ejercicio de la potestad en examen no puede quedar restringido, exclusivamente, a la regulación de la actividad que, en un mercado relevante, llevan a cabo los privados, esto es, las personas, empresas e instituciones distintas y opuestas a los organismos



dependientes del Estado, desde que, como ya se dijo, el mandato constitucional de igualdad, tanto ante la ley, como en el trato que el Estado debe dispensar en materia económica, impide restringir, en los señalados términos, el ámbito de aplicación de las instrucciones en examen.

**OCTAVO:** A lo dicho se debe agregar que, tanto en el texto de la Ley N° 19.911, que entró en vigencia en febrero del año 2004, como en el del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, que fuera publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 2005, se contenía una disposición idéntica a la que regula la potestad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se examina en estos autos.

En efecto, el texto del actual N° 3 del artículo 18 de la ley en comento se encuentra reproducido, en los mismos términos, en el artículo 17 C de la Ley N° 19.911 y en el N° 3 del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005.

Por otra parte, cabe subrayar que con fecha 8 de junio de 2006, esto es, cuando se hallaba plenamente vigente el precepto que otorga al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la potestad de dictar instrucciones generales, dicho tribunal dictó las denominadas "Instrucciones generales a que deben someterse los agentes económicos que participen en el mercado de



servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios", las que eran plenamente aplicables a las Municipalidades, tal como se desprende de su numeral I.-, que contiene las "Instrucciones a las Municipalidades respecto de las Bases de Licitación de Servicios de Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios, que deben elaborarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 18.695".

**NOVENO:** Así las cosas, resulta evidente que, pese a lo argüido por los magistrados del fondo al decidir la inadmisibilidad de la solicitud de autos, es lo cierto que dieciséis años atrás ese mismo tribunal ejerció la potestad de que se trata respecto de un mercado relevante específico, dictando instrucciones de carácter general que, explícitamente, se decidió que serían aplicables a entes públicos, específicamente, a las Municipalidades del país, resolución que fue modificada recién el 21 de marzo de 2013.

**DÉCIMO:** En estas condiciones aparece, cuando menos, contradictorio el argumento esgrimido por los juzgadores para desechar la petición materia de autos, puesto que, como resulta evidente, no es admisible que un mismo órgano jurisdiccional decida, en un caso, aplicar a ciertos entes estatales un conjunto de disposiciones dictadas en ejercicio de la potestad en comento, mientras



que, en otro caso posterior, resuelva, en sentido contrapuesto, negarse a examinar siquiera la procedencia de poner en ejecución idéntica facultad basado en que, de resolver lo pedido de manera positiva, las instrucciones resultantes se habrían de aplicar a los mismos órganos públicos mencionados, soslayando que por casi siete años éstos debieron someter su actuación a un conjunto de normas de este origen.

**DÉCIMO PRIMERO:** De lo hasta aquí razonado se sigue con nitidez que los magistrados del mérito efectivamente yerran al disponer la inadmisibilidad de la solicitud formulada en la especie, considerando que, como se dijo, una interpretación restringida de la facultad en comento no sólo resulta inadmisibile, sino que, además, contradictoria con el propio actuar previo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, motivo por el cual se acogerá la reclamación deducida por las peticionarias, en los términos que se dirán en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 27 y 31 del Decreto Ley N° 211, se resuelve que **se acoge** el recurso de reclamación deducido por Constructora LN Spa y Constructora Cristi Limitada en contra de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y, en su lugar, se declara que se admite a tramitación la solicitud planteada por las



citadas compañías en conformidad a lo establecido en el N° 3 del artículo 18 del Decreto Ley N° 211.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Matus.

Rol N° 22.271-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus A.



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E., Jean Pierre Matus A. Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a catorce de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

